



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero

Sr. Nalda García, Consejero y
Ponente

Sr. Madrid López, Consejero

Sr. Besteiro Rivas, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 6 de mayo de 2004, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial por la reclamación presentada a instancia de D. xxxxx xxxxx xxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 6 de abril de 2004 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial por la reclamación presentada a instancia de D. xxxxx xxxxx xxxxx debido a las lesiones producidas al pisar la tapa de una arqueta que se hundió, provocando que la pierna derecha se introdujera en el hueco, a la altura del nº xx de la calle xxxxxx en el municipio de xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 12 de abril de 2004, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 212/2004, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Nalda García.

Primero.- Con fecha 8 de agosto de 2002, mediante comparecencia ante uno de los técnicos del Ayuntamiento de xxxxxxxxxxxx, D. xxxxx xxxxx xxxxx reclama daños y perjuicios a causa de las lesiones que ha sufrido al pisar la tapa de una arqueta de la acera de la calle xxxxxx frente al nº xxxx.



Cifra el daño en la cantidad que ha tenido que abonar debido a las estancias fuera de su domicilio por razón de sus lesiones; esto es, 916,09 euros, según la factura del Hostal rrrrrrrrr donde estuvo hospedado durante el periodo comprendido entre el 6 de julio y el 8 de agosto de 2002.

Acompaña a su escrito una copia de los informes médicos emitidos durante su tratamiento médico.

Previamente, con fecha 7 de julio de 2002, el interesado había presentado una denuncia ante la Policía Local de xxxxxxxxx.

Segundo.- Con fecha 11 de julio de 2002, la Policía Local de xxxxxxxxx emite un informe sobre los hechos acaecidos, en el que hace constar:

“Realizada inspección ocular en el lugar que el implicado manifiesta ocurrieron los hechos, se observa que en la acera de enfrente del número xx de la C/ xxxxx hay una arqueta de hierro fundido de unos 40 x 40 cm con su cerquillo incluido desprendido de su anclaje en la acera, lo que resulta peligroso para el tránsito de peatones. Ante esta situación, se procede a la señalización de la arqueta mediante cinta plástica y se tramita telex urgente a los servicios de obras para su reparación”.

Tercero.- En el trámite de audiencia concedido al interesado, éste no realiza alegaciones.

Cuarto.- Con fecha 23 de febrero de 2004, el Instructor del expediente formula una propuesta de resolución desestimando la reclamación formulada.

Quinto.- El expediente remitido no está debidamente foliado, como sería conveniente.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el



artículo 4.1.h),1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla C), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones, al tratarse de un asunto de ámbito local.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3ª.- Concurren en el interesado los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de xxxxxxxxxxxx, en virtud del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La propuesta de resolución hace referencia al artículo 21.1.s) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica aquélla. Sin embargo, ha de corregirse esta mención, ya que el artículo sigue correspondiendo a la Ley del año 1985, si bien modificado por el artículo 1º de la Ley 11/1999. Es más, la referencia a las normas ha de hacerse a las originales, sin necesidad de mención de las modificaciones posteriores, ya que éstas quedan incorporadas a los textos normativos (obsérvese en la propuesta las numerosas referencias a las modificaciones operadas en las normas).

En el fundamento de derecho 8º de la propuesta de resolución se menciona el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Consideramos que esta referencia normativa no aporta nada en relación con esta clase de expedientes de responsabilidad patrimonial. La competencia queda suficientemente fundamentada con las normas citadas en el párrafo primero del citado fundamento de derecho.

Por otra parte, la propuesta de resolución es extraordinariamente parca en la descripción de los antecedentes de hecho y excesivamente genérica en los



fundamentos de derecho, sin que en la misma se realice un examen de las circunstancias que determinarían, en su caso, la existencia de responsabilidad patrimonial en relación con el supuesto concreto sobre el que se está resolviendo. Parece, más bien, que nos encontramos ante un modelo en el que la única variación vendría determinada por el nombre del reclamante.

Es conveniente, de igual modo, hacer notar el excesivo tiempo transcurrido desde que se interpone la reclamación de responsabilidad patrimonial hasta la fecha en la que se formula la propuesta de resolución.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a



la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexos causales que implican la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios formulada por D. xxxxx xxxxx xxxxx debido a las lesiones producidas cuando, al pisar la tapa de una arqueta a la altura del nº xx de la calle xxxxxxxx, la misma se hundió provocando que la pierna derecha se introdujera en el hueco.

El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, consta que lo hizo con fecha 8 de agosto de 2002, antes de transcurrir un año desde la fecha del hecho causante, que tuvo lugar el 6 de julio de 2002.

6ª.- Estima este Consejo Consultivo, al igual que los órganos que han informado a lo largo del procedimiento, que no existe responsabilidad por parte de la Corporación Local, el Ayuntamiento de xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx), por los daños causados.

Comprobadas la realidad y certeza del daño patrimonial sufrido por el reclamante y la regularidad formal de su petición, la única cuestión planteada consiste en determinar si el expresado daño ha sido o no consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público, presupuesto indispensable para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, conforme al artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.



La determinación de la relación de causalidad exige comprobar si, a la vista de los datos resultantes del expediente, la lesión sufrida por el reclamante fue o no consecuencia del defectuoso estado de la arqueta, de forma que el nexo causal se produjera, directa e inmediatamente, entre el funcionamiento del servicio y el daño producido.

En el caso examinado, del informe emitido por la Policía Local se desprende que efectivamente la arqueta se encontraba suelta y constituía un peligro para los viandantes. Exactamente en su informe hace constar que "realizada inspección ocular en el lugar que el implicado manifiesta ocurrieron los hechos, se observa que en la acera de enfrente del número xx de la C/ xxxxxxxx hay una arqueta de hierro fundido de unos 40 x 40 cm con su cerquillo incluido desprendido de su anclaje en la acera, lo que resulta peligroso para el tránsito de peatones. Ante esta situación, se procede a la señalización de la arqueta mediante cinta plástica y se tramita telex urgente a los servicios de obras para su reparación". No obstante, no hay constancia efectiva del accidente, tan sólo constan las afirmaciones del reclamante, las cuales no son suficientes para tenerlas por ciertas.

Asimismo, hemos de señalar que no ha quedado acreditado en el expediente la necesidad de permanecer en León, fuera de su domicilio, durante el plazo reclamado. De los informes médicos que constan en el expediente no se desprende, en modo alguno, que no pudiera volver a su domicilio, debiendo entender que los gastos soportados por el reclamante eran innecesarios puesto que los posibles desplazamientos que tuviera que realizar podían haberse realizado mediante transporte sanitario público.

La carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante de acuerdo con los viejos aforismos *necessitas probandi incumbit ei qui agit* y *onus probandi incumbit actori* y con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Administración, en su caso, deberá probar los hechos que desvirtúen los alegados. No habiéndose acreditado la existencia de la relación de causalidad entre el servicio público y el daño, procede desestimar la reclamación al no concurrir los requisitos exigidos por el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Por lo tanto, a la luz de los hechos probados y los preceptos aludidos, este Consejo Consultivo considera que en el presente caso no debe responder la Administración de los daños y perjuicios ocasionados al reclamante derivados del accidente sufrido.



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial por la reclamación presentada a instancia de D. xxxxx xxxxx xxxxx debido a las lesiones producidas al pisar la tapa de una arqueta que se hundió, provocando que la pierna derecha se introdujera en el hueco, a la altura del nº xxxx de la calle xxxxxx en el municipio de xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx).

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.